por silencio administrativo, de la aprobación de la liquidación provisional de las obras de «Readaptación del nuevo edificio para Juzgados en Alcalá de Henares (Madrid)»;

Visto también el testimonio del auto dictado el 26 de febrero de 1997, por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso de casación número 570/1997, interpuesto por la Administración del Estado contra la citada sentencia, en que se acuerda declarar desierto el recurso, sin hacer expresa imposición de costas;

Teniendo en cuenta que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105.1.a) de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio acuerda:

Primero.—Disponer la ejecución de la mencionada sentencia, cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:

«Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por “Cumaza, Sociedad Limitada”, contra desestimación presunta, por silencio administrativo, de la aprobación de la liquidación provisional de las “obras de readaptación del nuevo edificio para Juzgados en Alcalá de Henares (Madrid), acto que anulamos por ser contrario a Derecho, declarando el derecho de la demandante a percibir el importe de 16.996.034 pesetas, en concepto de liquidación provisional de las obras de referencia, así como los intereses legales que correspondan a contar desde los nueve meses de la recepción y hasta el momento del pago de dicha liquidación. Sin hacer imposición de costas.»

Segundo.—A efectos de ejecución de dicha sentencia, fijar los intereses legales en la cantidad de 8.165.742 pesetas.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 16 de diciembre de mayo de 1997.—P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre), el Subsecretario, Ramón García Mena.

Sr. Subdirector de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia.

7371 *ORDEN de 16 de diciembre de 1997 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 615/1995, interpuesto por «Ferrovial, Sociedad Anónima».*

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por «Ferrovial, Sociedad Anónima», contra la Administración del Estado, sobre intereses por demora en el pago de la certificación número 1 de las obras de «adecuación de locales para Magistratura de Trabajo número 3 de Santa Cruz de Tenerife», la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia con fecha 20 de diciembre de 1996, cuya parte dispositiva dice:

«Fallamos: Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de “Ferrovial, Sociedad Anónima”, contra la Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia e Interior de 3 de abril de 1995, por delegación de la Secretaría de Estado de Justicia, a que se contrae el mismo, que anulamos por no ser ajustada a Derecho, declarando el derecho de la empresa recurrente indicada a percibir en concepto de intereses de demora, en el abono de la certificación número 1 de las obras de “adecuación de locales para Magistratura de Trabajo número 3 de Santa Cruz de Tenerife”, la cantidad de 517.268 pesetas, a cuyo abono al demandante se condena a la Administración demandada; desestimando el resto de sus pretensiones. Sin expresa imposición de costas.»

El 3 de febrero de 1997, el Presidente de dicha Sala comunicó haberse declarado firme la mencionada sentencia y remitido testimonio de la misma para su cumplimiento,

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, acuerda lo siguiente:

Primero.—Abonar a la empresa recurrente la cantidad de 517.268 pesetas.

Segundo.—Ordenar la publicación del fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 16 de diciembre de 1997.—P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre), el Subsecretario, Ramón García Mena.

Sr. Subdirector de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia.

7372 *ORDEN de 16 de diciembre de 1997 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima».*

Visto el testimonio de la sentencia dictada el 22 de septiembre de 1995 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 811/1993, interpuesto por la empresa «Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima», contra la desestimación presunta por silencio administrativo del recurso de alzada, promovido contra la desestimación, también presunta, de la reclamación de intereses por demora en el pago de certificaciones correspondientes a las obras de nuevo edificio para Juzgados en Girona;

Visto también el testimonio del auto dictado el 4 de diciembre de 1996 por la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso de casación número 3/6433/1996, interpuesto por la Administración del Estado contra la mencionada sentencia, en que se acuerda declarar desierto el recurso, sin hacer expresa imposición de costas;

Teniendo en cuenta que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105.a) de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Que se ejecute en sus propios términos la repetida sentencia, cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mercantil “Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima” de Barcelona, primero contra la desestimación presunta, por silencio administrativo negativo, del recurso de alzada interpuesto por la misma ante el Ministerio de Justicia, en fecha 13 de septiembre de 1992, antes aludido, y después contra la resolución de fecha 14 de julio de 1993, de la Subsecretaría del referido Departamento ministerial, que resolvió expresamente tal recurso, calificado como de reposición, declarándolo inadmisibles por extemporáneo, debemos anular y anulamos las Resoluciones administrativas impugnadas por no ser las mismas conforme con el ordenamiento jurídico, y, en consecuencia de dicha estimación parcial del recurso, condenamos al Ministerio de Justicia a que abone a la empresa “Cubiertas y Mzov, Sociedad Anónima” la cantidad de 9.178.555 pesetas, en concepto de intereses legales de demora por retraso en el pago de las certificaciones números 8, 9, 10, 11, 12 y 13, correspondientes a las obras ya referidas, así como la cantidad de 1.101.427 pesetas, importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente a dicha cantidad de intereses, y también la cantidad a que ascienda el interés legal de la expresada suma de 9.178.555 pesetas desde la fecha de la presentación del escrito de demanda hasta la fecha en que se produzca el pago efectivo de la misma, cantidad esta última que se determinará en período de ejecución de sentencia. Ello con expresa imposición de costas procesales al Ministerio de Justicia demandado, por su temeridad y mala fe en cuanto a actuaciones objeto del pleito.»

Segundo.—Fijar dichos intereses legales de acuerdo con la liquidación practicada por la Subdirección General de Obras y Patrimonio, en la cantidad de 2.923.353 pesetas.

Tercero.—Que se abonen al «Grupo Acciona, Sociedad Anónima», actual denominación social de la entidad recurrente, las cantidades que se detallan a continuación:

Intereses de demora: 9.178.555 pesetas.

IVA: 1.101.427 pesetas.

Interés legal: 2.923.353 pesetas.

Total: 13.203.335 pesetas.

Cuarto.—Que se satisfaga el importe de las costas procesales cuando se determine por la jurisdicción competente y se notifique a este Departamento.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 16 de diciembre de 1997.—P. D. (Orden de 19 de octubre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre), el Subsecretario, Ramón García Mena.

Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia.

7373 *ORDEN de 16 de diciembre de 1997 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de marzo de 1991, en el recurso 317.320/1989.*

Visto el testimonio de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el 22 de marzo de 1991, en el recurso número 317.320/1989, interpuesto por la empresa «Construcciones Padrós, Sociedad Anónima», contra la desestimación por silencio administrativo de diversas peticiones formuladas en relación con el contrato de las obras de construcción de un edificio para Juzgados en Zaragoza;

Vista la Orden de este Ministerio de 3 de julio de 1991, por la que se acuerda el cumplimiento de la sentencia anterior;

Visto también el testimonio de la sentencia dictada el 5 de diciembre de 1996 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el recurso de apelación número 7.468/1991, interpuesto por la empresa recurrente y por la Administración General del Estado;

Teniendo en cuenta que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105.a) de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.—Que se ejecute en sus propios términos la mencionada sentencia del Tribunal Supremo, cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:

«Fallamos: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por «Construcciones Padrós, Sociedad Anónima», hoy sustituida por «OCP Construcciones, Sociedad Anónima», contra la sentencia dictada el 22 de marzo de 1991 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en los autos número 317.320 y estimando en parte el formulado contra la misma sentencia por la Administración General del Estado, debemos revocar y la revocamos en cuanto a su particular en que declarara «resuelto el contrato de obra suscrito entre la Administración y dicha empresa, para la construcción de Juzgados de Zaragoza, debiendo abonarse a la misma la cantidad de 10.256.388 pesetas, pronunciamiento que eliminamos, confirmándola en lo demás; sin hacer expresa imposición de las costas causadas.»

Segundo.—Teniendo en cuenta que la cantidad de 10.256.388 pesetas se abonó a la empresa demandante el 29 de octubre de 1991, en ejecución de la mencionada Orden, y que en la sentencia de la Audiencia Nacional se condenaba a la Administración al pago de intereses legales sobre dicha cantidad desde el día 27 de enero de 1988, pronunciamiento que subsiste, fijar dichos intereses en la cantidad de 3.601.155 pesetas, según liquidación presentada por «OCP Construcciones, Sociedad Anónima», a requerimiento de la Subdirección General de Obras y Patrimonio, que se ha comprobado ser correcta.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 16 de diciembre de 1997.—P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 6 de noviembre), el Subsecretario, Ramón García Mena.

Sr. Subdirector de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

7374 *RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1998, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se dispone la publicación, para general conocimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administrativo número 497/1996, interpuesto por doña Elena Perojo Toca.*

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia el 3 de noviembre de 1997 en el recurso contencioso-administrativo número 497/1996, interpuesto por doña Elena Perojo Toca, contra la Resolución de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 28 de marzo de 1996, que resolvió el concurso para la provisión de puestos de trabajo convocado por otra de 30 de octubre de 1995, respecto al puesto número 3.

La parte dispositiva de la mencionada sentencia contiene el pronunciamiento siguiente:

«Que estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Elena Perojo Toca, contra la Resolución de 28 de marzo de 1996 que resolvió el concurso convocado por Resolución de 30 de octubre de 1995, la cual anulamos en lo referente a la plaza número 3, debemos condenar y condenamos a la Administración a que por la Comisión de valoración se vuelvan a valorar los méritos específicos de la recurrente y demás aspirantes a dicha plaza, incluidos los cursos de formación y perfeccionamiento, y si superasen los mínimos, se adjudique aquella al concursante de mejor puntuación, sin hacer condena en costas.»

En su virtud, esta Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, conforme a lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 103 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto el cumplimiento y ejecución en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Madrid, 3 de marzo de 1998.—El Director general, José Aurelio García Martín.

MINISTERIO DEL INTERIOR

7375 *RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 1998, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la remisión de los expedientes administrativos correspondientes a los recursos contencioso-administrativos números 39/1998, 49/1998, 50/1998, 51/1998, 83/1998, 87/1998, 88/1998, 91/1998 y 95/1998 y se emplaza a los interesados en los mismos.*

En cumplimiento de lo solicitado por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,

Esta Subsecretaría acuerda la remisión de los expedientes administrativos correspondientes a los recursos contencioso-administrativos en el encabezamiento citados, interpuestos por doña María Teresa Valverde Fermín, doña María Mercedes Fernández López, doña María Ángeles Cantó Rueda, doña Amelia Cano González, doña María Covadonga Pérez Peláez, don Tomás Martínez López, doña Aurora López Blanco, doña María del Carmen Martín Durán y doña Casimira Concepción Soler Giménez, contra la Resolución de este Ministerio de 15 de diciembre de 1997, sobre resolución concurso general de méritos para la provisión de puestos de trabajo.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 64.1 de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor hubieren derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma para que comparezcan y se personen en autos ante la referida sala en el plazo de nueve días